

Alejandro Poiré: vocero en materia de seguridad

'Tenemos que ir tras los criminales'



"No hay nada más terrible que quien tiene la obligación legal, el mandato ciudadano de hacer cumplir la ley, sea quien se aproveche de esa posición para estar dañando la tranquilidad de la seguridad de la población. Y por eso precisamente es que la postura del gobierno federal es muy clara: tenemos que seguir avanzando en combatir al crimen, tenemos que seguir avanzando en garantizar que se puedan ejercer plenamente los derechos de los ciudadanos y sus libertades y tenemos que llegar sistemáticamente a ese camino por el camino de la justicia", sentencia.

Al cuestionársele sobre si existió un pacto gubernamental con organizaciones criminales en Tijuana para pacificar la ciudad, como se informó al gobierno estadounidense en un cable filtrado por WikiLeaks, el funcionario dice: esa información es "inexacta, imprecisa, sacada de contexto".

Certificación, la vacuna

Poiré asegura que el gobierno encabezado por Felipe Calderón ha hecho su parte para evitar que las autoridades locales tengan que pactar con el crimen organizado: ha establecido mecanismos que exigen a los mandos de seguridad pública estatales y municipales estar certificados, hay apoyos económicos vía los subsidios de seguridad pública para las entidades y municipios por más de 56 mil millones de pesos al año, y en 2011 se han dispuesto 2 mil 400 millones de pesos más para la concreción de la policía acreditable.

Explica que son los avances en la certificación de policías en donde puede verse qué entidades han hecho suyo el modelo de transformación institucional impulsado por el gobierno federal. Según él, éste es el primer paso para cristalizar la justicia para aquellos que piden se pacte con el narcotráfico.

De acuerdo con el último informe de avances sobre el progreso de las evaluaciones de control de confianza en las entidades, actualizado al 31 de marzo pasado, sólo una entidad registra un avance mayor al 75 por ciento en las evaluaciones estatales integrales de control de confianza, Aguascalientes.

Ocho entidades (Baja California, Colima, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán) registran avances entre el 25 y 75 por ciento en las

evaluaciones. Las otras 22 entidades registran avances de menos del 25 por ciento.

En cuanto a evaluaciones municipales, no hay ninguna entidad que registre un avance mayor al 75 por ciento. Sólo siete entidades registran avances entre el 25 y el 75 por ciento, Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Guanajuato, Morelos y Nuevo León. Las demás entidades registran avances menores al 25 por ciento.

"Esto es una transformación institucional muy profunda, en la cual todos tienen responsabilidad, particularmente quienes tienen mayor contacto directo con la vida de los ciudadanos que son las autoridades locales. Pero justamente de lo que se trata es que todas las autoridades cumplan con esos controles de confianza, que todas las autoridades avancen en la profesionalización, en la mejor capacitación, porque justamente es lo que va a garantizar que cualquier agente de policía, sea éste del municipio que sea, esté sometido a ese escrutinio y esté sometido a esos niveles de excelencia.

"Los datos son elocuentes por sí mismos", remata. ■

Jésica Zermeño

El gobierno rechaza la posibilidad de poner fin a la guerra contra el narcotráfico mediante un pacto.

Para el gobierno federal, no pactar con el crimen organizado es una cuestión de justicia.

Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, defiende la estrategia gubernamental con un argumento: "el verdadero camino a la paz pasa por la aplicación de la ley". Repite la fórmula cada vez que se le cuestiona sobre la posibilidad de un pacto entre la clase política y los criminales para abatir la violencia.

"Pensemos lo que significaría para las víctimas de un homicidio, de un secuestro, el decirle 'no, ¿sabes qué?, ya mejor me tengo que arreglar con los criminales'. ¿Qué sentido de justicia podríamos construir para nuestro país si ésa fuera la decisión que toma una autoridad? No lo podemos permitir. Tenemos que ir tras los criminales, que paguen por sus crímenes al amparo de la ley. Y en esa medida vamos a

ir disminuyendo la impunidad y construyendo una seguridad auténtica", explica.

Al preguntarle si el gobierno federal tiene la certeza de que en las entidades no hay acuerdos entre la clase política y las organizaciones criminales, Poiré responde que el gobierno federal ha insistido reiteradamente en que el esfuerzo contra la delincuencia tiene que ser apoyado por todos los actores, pero que son las autoridades locales las que tienen que responder más rápido, pues el 70 por ciento de los crímenes que se cometen son del fuero común.

"Cuando existe información que señala que hay autoridades que están participando se ha actuado en consecuencia, desde el inicio de la administración, y así se ha hecho en la propia autoridad federal. Se ha puesto a disposición de los jueces a servidores públicos de la autoridad federal.